

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2.020)

Auto Interlocutorio No. 352

MAGISTRADO PONENTE: VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ

MEDIO DE CONTROL:	REPETICIÓN
EXPEDIENTE:	76111-33-33-001-2019-00277-01.
DEMANDANTE:	NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
DEMANDADO:	RUBEN DARÍO APONZA
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA AUTO DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARO CADUCIDAD

Aprobada en Sala y Acta de la fecha. Convocatoria No. 69.

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 1389 del 25 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Buga que rechazó por caducidad la demanda instaurada por la Nación – Ministerio de Defensa en ejercicio del medio de control de repetición.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 142 del CPACA, el Ministerio de Defensa demandó que se condene al señor Rubén Darío Aponza a pagar la suma que la entidad canceló a raíz de la condena proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 26 de octubre de 2011.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 1389 del 25 de noviembre de 2019¹ proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, se rechazó la demanda de repetición presentada por el Ministerio de Defensa en contra del señor Rubén Darío Aponza argumentando:

Que conforme a lo previsto en el literal I numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la caducidad del medio de control de repetición es de dos años y se puede contabilizar a partir de dos momentos: 1) desde la fecha de pago de la condena impuesta, o 2) desde el vencimiento del plazo de 18 meses establecido en el CCA.

Advirtió que la sentencia de segunda instancia que revocó la sentencia de primera instancia y emitió una condena en contra de la entidad demandada quedó ejecutoriada el 26 de septiembre de 2014, toda vez que el auto que confirmó la liquidación de la condena en abstracto fue notificado a través del estado 166 del 23 de septiembre de 2014, por lo que concluyó que la entidad demandada debió pagar

¹ Folio 103-104



a más tardar el 26 de marzo de 2016 en virtud de lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA.

Concluyó manifestado que *“dado que el pago de la condena fue posterior al vencimiento del plazo de 18 meses que contempla el CCA, el término de caducidad se debe contabilizar a partir de tal vencimiento, luego entonces, el término de caducidad finiquitó el 27 de marzo de 2016, y dado que la demanda fue presentada el 08 de mayo de 2019, resulta claro concluir que la demanda fue presenta cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, razón por la cual se rechazará la misma, conforme lo dispone el numeral 1 del artículo 169 del CPACA”*.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante, presentó recurso de apelación argumentando lo siguiente²:

Expuso que el Juez de primera instancia impuso un término adicional al establecido por la ley para incoar el medio de control de repetición, pues el artículo 177 del CCA establece el procedimiento para el pago de condenas judiciales en contra de la nación sin incluir un término de caducidad para presentar las demandas de repetición y los 18 meses a que hace referencia son para adelantar los procesos ejecutivos ante la jurisdicción.

Concluyó estableciendo que el inciso 4 del artículo 177 del CCA *“en ningún caso establece un plazo a la Nación-Ministerio de Defensa nacional, para el pago de condenas judiciales, sino que dicho artículo regula lo pertinente a la efectividad de las sentencias judiciales en contra del estado y en el mismo se advierte que será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de condenas más lentamente que el resto y otorgar la facultad al acreedor de ejecutar la sentencia*.

Solicitó que para el cómputo del término de caducidad se tenga en cuenta lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 195 del CPACA, que establece un plazo de 10 meses para el pago de las condenas judiciales, pues el artículo 164, literal L del CPACA contempla dos opciones de contabilizar el término de caducidad, siendo el más favorable para la entidad *“la que establece el término de caducidad contabilizando el día siguiente al pago de la condena”*.

Dijo que, con la demanda se aportó la certificación expedida por el Tesoro del Ministerio de Defensa Nacional, cumpliéndose así el requisito de procedibilidad del medio de control de repetición.

² Folio 106 a 111 del expediente.



V.CONSIDERACIONES:

5.1 Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado contra la providencia de primera instancia.

Además, en virtud de lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto que rechaza la demanda es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. “...”

5.2 Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si era procedente rechazar la demanda por caducidad del medio de control de repetición, para lo cual resulta necesario establecer las características de dicho fenómeno y, en el caso concreto, determinar desde qué momento correspondía iniciar su contabilización.

5.3 Tesis

Se confirmará la providencia apelada, toda vez que en el presente asunto operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control repetición contenido en el literal I) del artículo 164 del CPACA.

Para arribar la anterior decisión, se realizará: i) un recuento normativo y jurisprudencial acerca de la caducidad del medio de control de repetición y ii) aplicarlo al caso concreto.

5.4 Caducidad – recuento normativo y jurisprudencial:

Para resolver, se tienen que, la caducidad es uno de los llamados presupuestos procesales del medio de control, esto es, uno de aquellos requisitos que se deben acreditar, ab initio, para que se pueda instaurar la demanda. Dichas exigencias, por regla general, deben ser verificadas en la primera etapa del proceso, es decir, en el momento del estudio para la admisión en la medida en que se debe propender por un control temprano del proceso.

El artículo 142³⁴ del CPACA consagra el medio de control de repetición y el artículo

³⁴ARTÍCULO 142. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o grgravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”



164 numeral 2 literal I) del CPACA, en relación con la oportunidad para presentar la demanda del medio de repetición, dispone “*Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.*”

Esta institución jurídica se estableció por el Legislador como una forma de lograr la seguridad jurídica que propende por el interés general, la cual es de obligatoria observación y aplicación por el juzgador al momento de admitir la demanda.

Respecto del cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición el Consejo de Estado en reciente jurisprudencia resolvió la duda que se presentó con relación a la norma que debe ser aplicada para el cómputo del término de caducidad, si la contenida en el CCA o en la Ley 1437 de 2011⁴. La Sala extrae las siguientes conclusiones:

- 1) El artículo 136 del CCA señalaba que los dos años del término de caducidad de la acción de repetición se contabilizaba a partir del día siguiente al pago total de la condena impuesta efectuado por la entidad, disposición que fue condicionada por la Corte Constitucional en la sentencia C-832/01 cuando consideró que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso 4 del artículo 177 del CCA.
- 2) El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición en aplicación del CCA se efectúa de la siguiente manera: a) la entidad cuenta con 18 meses para pagar la condena impuesta en su contra, los cuales se cuentan a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, una vez vencido dicho plazo inicia el cómputo de los 2 años para presentar la demanda de repetición y b) si la entidad condenada cancela el valor dentro de los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA, el término de 2 años inicia su cómputo a partir de la fecha en que se hizo el pago.
- 3) El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición en aplicación del CPACA se efectúa de la siguiente manera: a) la entidad cuenta con 10 meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia para pagar la condena impuesta en su contra, una vez vencido dicho plazo, inicia el cómputo de los 2 años para presentar la demanda de repetición y b) si la entidad condenada cancela el valor dentro de los 10 meses de que trata el artículo 192 del CPACA, el término de 2 años inicia su cómputo a partir de la fecha en que se hizo el pago.
- 4) Para ambas codificaciones, CCA y CPACA, rige la siguiente regla: si el pago de la condena impuesta se efectúa dentro del término que tenía la administración para cancelar al demandante (CCA: 18 meses y CPACA: 10



meses), la fecha del pago será el criterio para contar el término de caducidad; pero si ese término se vence sin que haya ocurrido el desembolso, será a partir del vencimiento de dicho término que comenzará a correr el plazo para la interposición de la demanda.

- 5) Sobre dicha conclusión, la sentencia del Consejo de Estado relacionada en precedencia, manifestó que *“Vale la pena aclarar que no resulta potestativo para el interesado establecer el momento a partir del cual inicia el cómputo de la caducidad, pues la disposición es clara en señalar que operará en el evento que primero ocurra. Lo anterior es así, por cuanto razonar en otro sentido implica concluir que la caducidad quedaría suspendida indefinidamente en el tiempo, en manos de quien debe cumplir la obligación de pagar totalmente una condena o las obligaciones indemnizatorias equiparables.”*
- 6) Frente a dicha modificación legal, resulta fundamental tener en cuenta el momento en el que la obligación legal se hizo exigible para la entidad en cuestión, esto, en aras de determinar si le era aplicable, en lo que al plazo para pagar la condena se refiere, lo previsto en el Código Contencioso Administrativo -18 meses-, o por el contrario, lo que es propio a la luz de lo dispuesto en el C.P.A.C.A. -10 meses-.
- 7) Para dicho fin, hay que tener en cuenta lo expuesto en el artículo 308 del CPACA⁴ que regula el régimen de transición de la Ley 1437 y establece que dicho código comenzará a regir el 2 de julio de 2012.

6. Caso concreto

De conformidad con el artículo 320⁵ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306⁶ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose **solamente** sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Para iniciar, el Despacho considera que, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada en precedencia, en el caso de autos el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe ser realizado teniendo en cuenta los parámetros que exige el CPACA, bajo los siguientes planteamientos:

⁴ Artículo 308. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

⁵ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

(...).

⁶ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



1.-Con la demanda y en el trámite procesal se aportaron los siguientes documentos relevantes:

-Sentencia del 26 de octubre de 2011 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso nro. 76001233100020050333801, en donde se revocó la sentencia de primera instancia y se declaró extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por las lesiones sufridas por el señor Wainer Banguera Quiñonez en hecho acaecidos el 23 de agosto de 2003 cuando prestaba servicio militar obligatorio y, como consecuencia de ello, se condenó al pago de unas sumas de dinero por perjuicios morales y lucro cesante, esta última en abstracto⁷.

- Contra dicha decisión se efectuaron los siguientes trámites: 1) se resolvió la solicitud de aclaración de la sentencia que presentó el apoderado judicial de la parte demandada dentro del término de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia⁸ y 2) se inició el incidente de liquidación de condena en abstracto de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, conocida en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Buga que a través del auto interlocutorio nro. 2340 del 15 de julio de 2013⁹, estableció como monto de la condena el valor de \$78.774.528 y en segunda instancia, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca que a través del auto interlocutorio nro. 145 del 12 de septiembre de 2014 confirmó dicha decisión, notificada a través del estado nro. 166 del 23 de septiembre de 2014¹⁰.

-En virtud de dicho trámite se entiende que la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca que impuso una condena a la entidad demandante quedó ejecutoriada el 26 de septiembre de 2014, ya que el auto que confirmó la liquidación en abstracto de la condena impuesta por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante fue notificado por estado nro. 166 del 23 de septiembre de 2014¹¹.

-Copia de la Resolución 6577 de 12 de septiembre de 2018, proferida por el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia del proceso de reparación directa¹². En este acto administrativo, se reconocieron intereses moratorios, por la suma total de \$134.134.939.32¹³. Decisión que fue adicionada a través de la Resolución nro. 7228 del 05 de octubre de 2018, proferida por el director de asuntos legales, ordenando el pago de la suma de \$163.364.510.63¹⁴.

⁷ Folio 36-48 del expediente.

⁸ Folio 51-55 del expediente.

⁹ Folio 63-70 del expediente

¹⁰ Folio 57- 61 del expediente.

¹¹ Folio 61 del expediente.

¹² Folios 81 del expediente.

¹³ Folio 81-82 del expediente.

¹⁴ Folio 83-84 del expediente.



- Copia de la certificación del 14 mayo de 2019¹⁵, suscrita por la tesorera del Ministerio de Defensa Nacional en la que se documentó el pago efectuado en favor de los accionantes del proceso de reparación directa.

Teniendo en cuenta las piezas procesales relacionadas en precedencia, se encuentra que el medio de control de reparación directa que dio origen a la sentencia condenatoria por la cual se repite fue tramitado en el margen del Código Contencioso Administrativo, sin embargo, la sentencia base de repetición quedó en firme en vigencia de la Ley 1437 de 2011; de ahí que el plazo para dar cumplimiento a la condena impuesta era de 10 meses contados a partir de la ejecutoria de la respectiva decisión.

Así las cosas, se tiene que la sentencia del 26 de octubre de 2011, por medio de la cual se impuso la condena, cobró ejecutoria el 26 de septiembre de 2014; por tanto, los 10 meses con los que contaba la entidad demandante para pagar la obligación aludida fenecieron el 26 de julio de 2015 y el pago se hizo en dos fechas: el 26 de septiembre y 30 de octubre de 2018, por ello, el término de caducidad se contabiliza a partir del vencimiento del término de 10 meses, es decir, desde el 26 de julio de 2015, hasta el 26 de julio de 2017.

En consecuencia, al haber sido presentada la demanda de repetición el 7 de mayo de 2019, según constancia de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali¹⁶, es claro para la Sala que en el presente asunto operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por tanto, el auto interlocutorio nro. 1389 proferido el 25 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, debe ser confirmado.

En consecuencia, se;

R E S U E L V E:

PRIMERO. -CONFIRMAR el auto interlocutorio nro. 1389 proferido el 25 de noviembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, por lo expuesto.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,

¹⁵ Folio 96 del expediente.

¹⁶ Folio 16 del expediente.

Radicación
Medio de control
Demandante
Demandado

: 2019-00277-01
: Repetición
: Nación- Ministerio de Defensa
: Ruben Darío Aponza




ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada


VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado